

N.º EXPEDIENTE:

Fecha de la denuncia:

A LA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO QUE CORRESPONDA

(NOMBRE, APELLIDOS, DNI Y DOMICILIO), ante el Instructor comparece, y como mejor proceda en Derecho, **DICE:**

Que me ha sido notificado acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador por presunta infracción administrativa prevista en el **(CITAR artículo y Ley por los que se ha sancionado, habitualmente es el art. 36.6 de la Ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana)** y no estando conforme con ello y según lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dentro del plazo de quince días que la Ley otorga, formulo las siguientes:

ALEGACIONES

PRIMERA.- IMPOSIBILIDAD DE SANCIONAR POR INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 36.6 DE LA LO 4/2015 SIN EXISTIR DESOBEEDIENCIA AL AGENTE DE LA AUTORIDAD.

El Acuerdo de iniciación de procedimiento en el que se recoge la propuesta de sanción, supone que ésta correspondería por una vulneración del artículo 36.6 de la LO 4/2015, que determina como infracción administrativa lo siguiente:

“La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación”.

Sin embargo yo **en ningún momento desobedecí al agente**, sino al contrario, obedecí escrupulosamente y en todo momento sus instrucciones. En caso de manifestarse lo contrario por el agente, éste estaría prevaricando, y ello se desprende con claridad del hecho de que de las casi un millón de denuncias impuestas por agentes en España durante el Estado de Alarma una gran mayoría están impuestas bajo la misma fundamentación, de lo que se deduce que lejos de ser varaces siguen unas pautas dadas para denunciar y que la sanción no decaiga.

Por tanto, al haber obedecido al agente, no se me puede imponer una sanción por desobediencia al agente.

Si la propuesta de sanción pretendiera basarse en que la desobediencia existe por el mero hecho de haber contravenido las medidas recogidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de

Marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID 19 habremos de manifestar que en ningún caso la contravención de las medidas citadas en dicho Real Decreto pueden sustentar una sanción por desobediencia ya que el artículo 36.6 de la LO 4/2015, ya que esta recoge como infracción *“la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones” pero no el incumplimiento de una normativa, fuere esta cual fuere*”.

El incumplimiento de una disposición normativa lleva aparejada la sanción que esta imponga a los hechos que tipifique como sancionables, pero la desobediencia lleva un plus añadido, que es desobedecer al agente. En caso contrario nos encontraríamos ante el absurdo de que toda infracción de una norma que llevara aparejada sanción supondría a su vez una sanción por desobediencia a la norma, que es lo que se pretende en este caso.

Por tanto y como es obvio, tanto de la dicción literal del artículo 36.6 de la LO 4/2015, como de la propia interpretación que lleva haciéndose de la misma desde su promulgación y que jamás ha supuesto una sola sanción por una infracción normativa sin desobediencia a un agente de la autoridad, la propuesta de sanción debe decaer.

SEGUNDO.- INEXISTENCIA DE SANCIONES EN EL RDL 463/2020.

El artículo 20 del mismo RDL 463/2020 establece respecto al Régimen Sancionador que:

“El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en el Estado de Alarma será sancionado con arreglo a las Leyes, en los términos establecidos en la LO 4/1981 de 1 de junio”.

Pues bien, dicha LO 4/1981, en su artículo 10 recoge:

“El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la Autoridad competente en el Estado de Alarma será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las Leyes”.

Sin embargo, y volviendo a lo expuesto en el apartado SEGUNDO, no hay ninguna Ley que imponga sanciones por vulnerar las limitaciones impuestas en el artículo 7 del RDL 463/2020. Por tanto y no existiendo dicha Ley que imponga sanciones, es absoluta y radicalmente contrario a Derecho imponer sanción alguna por incumplir las medidas recogidas en el artículo 7 del RDL 463/2020.

A nadie se le escapa que la responsabilidad de esto es del legislador, que debió recoger las conductas tipificadas y las sanciones aparejadas, pero al no haberlo hecho, con negligencia manifiesta o desconocimiento palmario, la imposibilidad de imponer sanciones por otros hechos que la desobediencia real y efectiva a los agentes de la autoridad es una realidad absolutamente innegable.

En mi caso concreto se me pretende sancionar por unos hechos que no se encuentran tipificados en ninguna norma legal, y que ninguna normativa indica que lleven aparejada una sanción.

(AHORA EXPLICAS POR QUÉ TE HAN SANCIONADO, POR EJEMPLO, si la sanción es por ir a un supermercado lejano decir que la norma no dice que no se puede ir a un supermecado lejano sino que permite salir a adquirir alimentos).

Como se ha dicho anteriormente, ni RDL 463/2020 que en su artículo 7 impone una serie de limitaciones a la libertad de circulación, ni ninguna otra disposición normativa imponen ningún tipo de sanción a mi conducta.

TERCERO.-IMPOSIBILIDAD DE SUPRIMIR EL DERECHO DE CIRCULACIÓN POR UN ESTADO DE ALARMA LO QUE SUPONE SU ILEGALIDAD E INCONSTITUCIONALIDAD.

El RDL 463/2020 no se ajuste a lo previsto en la Ley Organica 4/1981 que regula los estados de alarma, excepción y sitio y por tanto tampoco a nuestra Carta Magna de la que deriva esta regulación.

Como se puede observar, el articulo 11 a de la citada Ley Orgánica dispone, entre otras, que se podrán acordar medidas tales como:

“Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos”.

Sin embargo, el RDL 463/2020 suprime el derecho a la libre circulación, permitiéndolo únicamente bajo determinados supuestos algo que sólo se podría haber efectuado en un Estado de Excepción pero nunca de Alarma.

Se trata de la supresión de un derecho fundamental, que no tiene cabida bajo el Estado de Alarma, de tal modo que al ser ilegal esta supresión o suspensión de nuestro derecho fundamental a la libre circulación, a la libertad en realidad, toda sanción impuesta al socaire de este ilegal RDL 463/2020 debe decaer nula por el simple hecho de que su sustento legal es una regulación que no puede imponer la supresión del derecho a la circulación bajo la que se me pretende imponer esta sanción.

CUARTO.- (PODÉIS EXPONER TODO LO QUE QUERÁIS EN VUESTRO DESCARLO, COMO QUE LOS HECHOS SON INCIERTOS, QUE TENÉIS TESTIGOS...)

Por todo lo expuesto,

SOLICITO AL ÓRGANO AL QUE ME DIRIJO, que previa admisión de este escrito y documentos adjuntos, que se han presentado dentro del plazo establecido legalmente, se tengan por **FORMULADAS LAS ALEGACIONES** realizadas en el mismo, y conforme a las mismas se acuerde dejar sin efecto el expediente sancionador revocando así mismo la propuesta de sanción notificada por ser de justicia.

FIRMADO